

C.A. de Temuco

Temuco, diecinueve de octubre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

I.- EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS.

PRIMERO: Con fecha 17 de agosto de 2020, en el folio 42, la parte demandada observó los documentos que presentara en segunda instancia la demandante y que consisten en la copia de la carpeta de investigación fiscal, ruc 1610033072 y que ya había sido agregada en primera instancia, fundando su incidencia en que estos documentos han sido acompañados en forma extemporánea.

SEGUNDO: Que al respecto, sin perjuicio que de acuerdo lo previsto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, los referidos documentos ya habían sido acompañados oportunamente en primera instancia y que sólo se han reiterado en ésta, también en forma oportuna, y teniendo presente, además, que la objeción no se funda en la falta de integridad o autenticidad, se rechazara la objeción, como se dirá en lo resolutivo.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

TERCERO: La demandada interpuso recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primera instancia, invocando la causal prevista en el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.



CUARTO: El recurrente funda la causal en que la sentencia, para acoger la acción, tuvo por acreditado el dominio del caballar con relación al demandado, fundado en que se habría probado a su respecto la posesión del mismo, aplicando la presunción de dominio establecida en el inciso segundo del artículo 700 del Código Civil, que presume dueño al poseedor mientras otra persona no justifica serlo.

QUINTO: Agrega el recurrente que la calidad de poseedor del caballar no fue expuesta ni desarrollada por la demandante, ni en el escrito de demanda ni en el de réplica, produciéndose de esta manera el vicio, al haberse extendido el sentenciador a puntos no sometidos a su decisión.

SEXTO: Que al respecto, para resolver el recurso, debe tenerse en consideración que los actores han deducido una demanda por responsabilidad extracontractual en contra de don José Antonio Galilea Vidaurre, por los daños que ocasionó un caballar de su dominio y que figura inscrito a su nombre en el registro SOFO, según inscripción N° 241222, solicitando que sea condenado en su calidad de dueño del animal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2326 del Código Civil.

SEPTIMO: Que para resolver el recurso debe precisarse que, como lo ha resuelto en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema, la causal de Ultra Petita no sólo se puede producir en la parte resolutive del fallo (propiamente ultra petita), sino que también cuando se extiende a puntos no sometidos a su decisión, hipótesis que se denomina extra petita.

En este sentido, la Excma Corte Suprema ha dicho que *“Asimismo, según ha determinado uniformemente esta Corte Suprema, el fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas*



acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio” ; agregando que “Que, asimismo, sobre el particular, la doctrina comparada ve en la denominada ultra petita - en el doble cariz antes descrito -, un vicio que conculca un principio rector de la actividad procesal, cual es, el de la congruencia y que ese ataque se produce, precisamente, con la ?incongruencia? que pueda presentar una decisión con respecto al asunto que ha sido planteado por los litigan. El principio de congruencia se basa en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Primeramente, busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, conspira en su contra la falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, a los que pretende dotar de eficacia. Por tanto, se trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso. Si bien, la doctrina enfatiza los nexos que han de concurrir entre las pretensiones sostenidas por el actor y la sentencia, la misma vinculación resulta de la misma alta importancia tratándose de la oposición, la prueba y los recursos, encontrando su mayor limitación en los hechos, pues aunque el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, ello no aminora la exigencia según la cual el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes han sostenido en el pleito. (C.S. Considerandos cuarto y quinto de sentencia de fecha 29 de agosto de 2011, rol 2.472-2010).



OCTAVO: Que teniendo presente el marco fáctico y jurídico antes señalado, necesariamente debe desestimarse el recurso, por cuanto el fundamento en virtud del cual fue condenado el demandado es exactamente el mismo que se le atribuyó en la demanda, esto es, su calidad de dueño del caballar causante del accidente, lo que fue probado mediante una de las maneras de probar la propiedad, cual es, su calidad de poseedor del mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 700 inciso segundo del Código Civil, no habiendo afectación alguna al debido proceso, ni al principio de congruencia como parte integrante del mismo.

NOVENO: Que sin perjuicio de lo dicho, dejando establecido la inconcurrencia del vicio, debe rechazarse el recurso además por cuanto, aun de considerarse que concurre y sólo para este efecto, igualmente no ha tenido trascendencia en lo que dice relación al establecimiento de la calidad de dueño del caballar por parte del demandado, por cuanto ha sido el propio demandado quien lo ha confesado, según se aprecia en la absolución de posiciones que rola en el folio 29, según se dirá al referirse al recurso de apelación

III.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION.

Se reproduce la sentencia apelada, eliminándose el párrafo tercero del considerando Trigésimo tercero, así como los montos fijados como indemnización por el daño moral respecto de los actores Roger Cruces, Enrique Sáez Sáez y Luis Flores Pedraza, consignados en los párrafos cuarto y quinto del considerando Trigésimo Cuarto.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE.

DECIMO: Que sin perjuicio que la calidad de dueño del caballar ha sido debidamente acreditada, por cuanto, según se explica en el considerando décimo séptimo, se probó la calidad de poseedor del mismo, debiendo presumirse dueño según lo previsto en el artículo



700 inciso segundo del Código Civil, lo cierto es que la titularidad en el dominio resulta indubitada si se tiene presente la propia confesión del demandado.

En efecto, bajo el número uno del pliego de posiciones se le pregunta textualmente al demandado “cuál es la entidad encargada de inscribir *a nombre de los propietarios* los caballares” y el demandado respondió, refiriéndose a quien inscribe estos animales a nombre de sus propietarios, que es la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco; luego, en el número tres del pliego se le pregunta a nombre de quien está inscrito el caballo involucrado en el accidente, respondiendo el demandado “tengo conocimiento que dicho ejemplar figura inscrito en el registro genealógico a nombre del criadero María Ester El Fortín.

Sin embargo, es un hecho indubitado, reconocido en la contestación y además porque así consta en la carpeta de investigación fiscal, que el caballo figuraba inscrito a nombre de José Antonio Galilea Vidaurre, quien reconoció que la inscripción se hace a nombre de los propietarios.

DECIMO PRIMERO: Que en lo que dice relación con la indemnización de perjuicios por el daño moral, debe recordarse que a diferencia del daño material, ésta no tiene por finalidad reparar el daño, sino que tiene un rol satisfactorio, en el sentido que lo que busca es compensar de algún modo a la víctima, la que si bien jamás va poder hacer desaparecer el perjuicio debido a su propia naturaleza, por lo menos podrá tener otras satisfacciones que le permitan de cierta manera apaciguar el detrimento sufrido.

DECIMO SEGUNDO: Que en este orden de ideas, debe decirse que los hechos que justificaron la demanda provocaron gravísimas secuelas en los demandantes Enrique Sáez Saéz y Luis Flores Pedraza, quienes producto de los mismos, han sufrido una alteración radical en sus vidas, un cambio irreparable, al punto que



nunca más van a poder a disfrutar de la vida como lo hacían antes, sin perjuicio de todas las dolencias derivadas del accidente y del trauma que supone haber participado en las violentas circunstancias en que se produjo.

DECIMO TERCERO: En efecto, respecto de don Enrique Sáez Saez se ha declarado su incapacidad laboral en un 70% y ello lo ha sido en virtud de las graves secuelas físicas que le provocó el accidente y que están consignadas en los considerandos trigésimo tercero y el primer considerando trigésimo cuarto, que demuestran a partir de ese trágico hecho, jamás su vida volverá a ser la misma, no pudiendo trabajar más, sin perjuicio de las lesiones que tales documentos describen.

DECIMO CUARTO: Respecto de Luis Flores Pedraza, se ha declarado su incapacidad laboral en un 95%, por cuanto como consecuencia del accidente, entre otras cosas, y por si fuera poco, quedó ciego, lo que constituye un atentado no sólo a su integridad física, sino que también a su integridad síquica, pues un hecho de esa naturaleza, que altera tan dramáticamente la vida de cualquier persona, evidentemente que provoca un estado sicológico que impide el disfrute de la vida.

DECIMO QUINTO: Que así las cosas, no puede ignorarse que el perjuicio ocasionado a estos actores es de gran intensidad y gravedad, considerando que las secuelas físicas son permanentes, siendo esperable que sus vidas futuras estarán marcadas irremediabilmente por esta trágica experiencia, que ha lesionado gravemente su integridad física y psíquica, de manera que teniendo en cuenta el rol que la indemnización tiene en el daño moral, deberá concederse una suma sustancialmente superior a la fijada por el tribunal, que sea más condigna con el daño que se le ha provocado a estos actores.



DECIMO SEXTO: Por último, en lo que dice relación al daño moral experimentado por don Roger Cruces Cabezas, si bien no tiene la magnitud de los otros dos demandantes, no puede soslayarse que el trauma sufrido a propósito del accidente es de alta intensidad, ya que fue él quien debió socorrer a sus compañeros, que quedaron atrapados, con toda la desesperación y angustia que ello supone, por lo que a su respecto también se aumentará el monto fijado.

Y visto lo previsto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 186 y 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

I.- SE RECHAZA la objeción de documentos presentada por el demandante con fecha 17 de agosto de 2020 y que rola en el folio 42.

II.- SE RECHAZA el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 06 de junio de 2019.

III.- SE CONFIRMA la sentencia apelada de fecha 06 de junio de 2019, con las siguientes declaraciones:

1.- Que se aumenta la indemnización concedida a título de daño moral respecto del demandante Enrique Sáez Saéz a la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos).

2.- Que se aumenta la indemnización concedida a título de daño moral respecto del demandante Luis Flores Pedraza a la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) .

3.- Que se aumenta la indemnización concedida a título de daño moral respecto del demandante Roger Cruces Cabeza, a la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos).

4.- Que se confirma en lo demás la sentencia apelada.



IV.- Que se condena a la demandada a las costas del recurso.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado Integrante señor Marcelo Neculman Muñoz.

Rol N° 1155-2019. (sac)



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Presidente Carlos Ivan Gutierrez Z., Fiscal Judicial Oscar Luis Viñuela A. y Abogado Integrante Marcelo Eduardo Neculman M. Temuco, diecinueve de octubre de dos mil veinte.

En Temuco, a diecinueve de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

